

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL**

Medellín, diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Exp. 006-2022-00350-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de NOÉ DE JESÚS CORTÉS CHAVERRA, frente al auto que decidió declarar próspera la excepción previa de “INEXISTENCIA DEL DEMANDANTE” dentro del proceso ordinario laboral que se adelanta en contra de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

**ANTECEDENTES:**

La activa radicó el escrito inicial con el propósito de obtener de la Universidad de Antioquia el reconocimiento de un reajuste de su pensión de jubilación convencional a partir del año 2000 con la respectiva indexación y las costas del proceso.

Una vez notificada en debida forma la pasiva, se arribó oposición a las pretensiones, con formulación de la excepción previa de inexistencia del demandante (Págs.23-26 Archivo 09), argumentando que el señor Chaverra falleció el 04 de noviembre de 2019 según el Registro Civil de defunción, siendo sustituida su pensión en la señora María Azucena Quintero Cortés en calidad de cónyuge sobreviviente, situación que considera da lugar a la

terminación del proceso de manera anticipada por haberse presentado la demanda con posterioridad a la muerte, lo que quiere decir que ello ocurrió cuando el poder especial otorgado había terminado.

Ante tal pronunciamiento, el Juzgado de conocimiento por cuenta del principio de economía procesal y verificadas las condiciones del proceso, emitió el auto de fecha 02 de marzo de 2023 por medio del cual le dio prosperidad a la excepción de inexistencia del demandante formulada, por encontrar que el poder que había sido otorgado por el demandante a la abogada el 09 de marzo de 2018 para el momento de la presentación de la demanda había terminado por cuenta de la muerte del poderdante acaecida el 04 de noviembre de 2019, encontrando en el actuar de la profesional una contravención a sus deberes de diligencia en tanto radicó una demanda a nombre del titular de un derecho que había fallecido cuatro años atrás, no existiendo para ese momento capacidad para ser parte dentro del proceso. Bajo ese panorama, dispuso la terminación del proceso, con condena en costas a cargo de la apoderada (Archivo 11).

La mandataria judicial del demandante se apartó de lo decidido interponiendo el recurso vertical, exponiendo que en efecto el poder le fue otorgado por el señor Cortés Chaverra el 09 de marzo de 2018 y la demanda fue presentada el 05 de agosto de 2022, pero enfatiza en que el hecho de la muerte era por ella desconocido y resalta que la Universidad demandada reconoce como sustituta a su cónyuge. En esa medida, indica que la Juez erró al interpretar la normativa aplicable, debido a que de ella claramente se extrae que la muerte del demandante no pone fin al mandato, sin que el precepto señale que la demanda se presente antes o después del fallecimiento, además que no existe prueba de una revocatoria de parte de la señora María Azucena u otro heredero que le reste vigencia al poder, sugiriendo que lo que debió ocurrir fue requerir a la cónyuge para que ratificara o revocara el poder, pero que al no procederse de ese modo existe vulneración al debido proceso, argumentos a partir de los cuales solicita la revocatoria de la decisión, incluyendo las costas que le fueron impuestas (Archivo 12).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, es apelable el auto que decida sobre excepciones previas, en coherencia con los casos enlistados en los numerales 3° del artículo 100 del CGP aplicable en este trámite por la remisión integrada en el artículo 145 del CPTSS y el artículo 6º del Código Adjetivo Laboral.

Pues bien, para la resolución de lo propuesto, se tiene que la excepción de “inexistencia del demandante” tiene su razón de ser en el presupuesto procesal de capacidad para ser parte, del que se ocupa el artículo 54 del CGP; que consiste en exigir que quien intervenga en un proceso judicial exista, y tal condición la ostentan las personas naturales y jurídicas, los patrimonios autónomos, y el que determine la ley, por lo que para comparecer válidamente a un proceso judicial debe comprobarse su vida legal auténtica y legítima pues el trámite debe adelantarse con la certeza de la existencia real de quienes en van a actuar en el litigio como partes.

Atendiendo las razones del recurso, se acude al contenido del artículo 76 del CGP que en lo pertinente reza: *“la muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores”*

De la intelección de ese precepto, bien asiste razón a la recurrente cuando afirma que la muerte del poderdante no finiquita el mandato, pero es que esa conclusión es viable en el contexto de que el deceso se presente cuando el proceso ya ha tomado su curso, pero se excluye su vigencia en el caso de sobrevenir el fallecimiento previo a la interposición de la acción judicial pues no de otro modo se interpreta la disposición cuando clarifica *“si ya se ha presentado la demanda”*, de donde se deriva que si el sujeto era inexistente

desde un momento previo a la presentación del medio judicial, también lo era su capacidad para ser parte, pues debe entenderse que esa eventualidad infortunada dio paso a la terminación del poder desde su misma ocurrencia.

En el asunto, patente e indiscutido es que el poder fue otorgado de parte de Noé de Jesús Cortés Chaverra a la abogada Gloria Cecilia Gallego desde el 09 de marzo de 2018 para lograr lo hoy reclamado (Págs. 28-29 y 32 Archivo 01), demanda que finalmente se radicó el 05 de agosto de 2022, cuando ya habían transcurrido casi los tres años desde que el interesado murió, lo que ocurrió el 04 de noviembre de 2019 (Pág. 193 Archivo 01 Carpeta 09), circunstancias que permiten advertir que el mandato que se había otorgado estaba extinto por disposición legal, sin que sea de recibo que tras la demora para dar inicio al trámite por razones que desconoce esta colegiatura, la mandataria aduzca un desconocimiento del evento sobreviniente que elimina la validez al poder especial arribado al trámite, pues ello se constituye en una situación insalvable que incluso da lugar, si se quiere, a una investigación disciplinaria, ya que estando ante un caso con un importante transcurso del tiempo, la profesional estaba obligada a corroborar si bajo esa particularidad contaba o no con la habilitación para ejercer su derecho de postulación, pero al incurrir en esta omisión, activó el aparato judicial con inexistencia del sujeto procesal que representaba, presupuesto que se constituía en esencial para impulsar el litigio y sin el cual no era permitido el inicio ni la continuación del proceso.

Es verdad que la demandada acepta como sustituta de la prestación del causante a la cónyuge, señora María Azucena Quintero de Cortés, a quien por Resolución 0254 del 24 de agosto de 2020 expedida por la Jefe de División de Talento Humano de la Universidad de Antioquia le fue reconocida la pensión de sobrevivientes (Págs. 209-212 Archivo 01 Carpeta 09), pero ello por sí mismo no traslada de manera automática la condición de demandante en esta beneficiaria como sucesora del fallecido bajo iguales términos de la demanda iniciada, pues como se dijo en líneas precedentes, así solo acontece cuando la defunción sucede luego de presentada la demanda, donde bajo su voluntad conserva o revoca el poder, pero como el evento del óbito tuvo lugar desde varias anualidades precedentes a la fecha en que se acudió a la jurisdicción,

no es posible dar cabida a esa posibilidad, ya que lo que debió acontecer es que en la calidad que para agosto de 2022 y desde 2020 ostentaba la señora Quintero, si así lo consideraba, debió concurrir como sujeto procesal demandante con miras a obtener un reajuste de su prestación de sobrevivencia, pero de ningún modo, esa situación permite avalar una actuación emprendida como si estuviera viva la persona natural demandante que falleció.

Tampoco, atendiendo a que en voces del comentarista procesal Miguel Enrique Rojas Gómez la capacidad para ser parte en el marco de esta excepción puede corregirse cambiando la identidad de la parte inexistente por el sujeto que corresponda, es posible permitir tal modificación toda vez que no de ese modo lo consiente la peculiaridad de esta cuestión y las etapas ya surtidas, cuya orientación pudo ser rectificadas para el momento de la admisión de la demanda, pero estando en este punto integrado el litigio a espera de la realización de las diligencias de los artículos 77 y 80 del CPTSS, es desatinado y contrario a las reglas procesales dar un rumbo distante al que convocó esta acción, que valga reiterar, se adelantó sin la satisfacción de los postulados necesarios para su trámite por no contar con el sujeto activo de la relación jurídica controvertida.

Tales reflexiones imponen la confirmación de la decisión que dio prosperidad a la excepción previa de “*inexistencia del demandante*” y que da paso a ordenar la terminación del proceso con la consecuente condena en costas a cargo de la mandataria, dado que en el campo de su conocimiento pleno de la ley dio movimiento a la gestión judicial de manera innecesaria estando bajo su exclusiva responsabilidad las situaciones de hecho que conllevaron a esta determinación que hoy se corrobora, atendiendo por demás la falta a sus deberes como apoderada en los términos que enlista el artículo 78 del CGP específicamente los relacionados con la lealtad y buena fe en todos los actos y en el ejercicio de sus derechos procesales, y la evidente carencia de fundamento legal de la demanda con la que el artículo 79 ibídem permite presumirse temeridad, conducta que en voces del artículo 81 del mismo compendio procesal da lugar a que sea el apoderado quien asuma las costas del proceso.


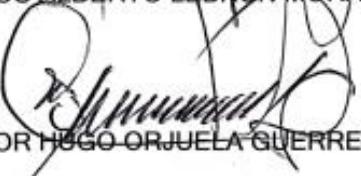
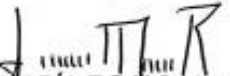
En esta instancia acorde a lo estipulado en el artículo 365-3 del CGP, las costas procesales estarán a cargo igualmente de la apoderada judicial Gloria Cecilia Gallego, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$300.000.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto materia de apelación de fecha y procedencia conocidas. Las costas en esta instancia estarán a cargo de Gloria Cecilia Gallego, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$300.000.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la decisión anterior fue notificada por ESTADOS N° 63 fijados el 18 de abril de 2023 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.